

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DEL VALLE DEL CAUCA

MEDIO DE CONTROL	POPULAR
EXPEDEINTE:	76-001-33-33-000-2020-00189-00
DEMANDANTE:	EDUARDO ALFONSO CORREA VALENCIA edualcova@yahoo.es
DEMANDADO:	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS notificacionesjudiciales@superservicios.gov.co
MAGISTRADA PONENTE	DRA. LUZ ELENA SIERRA VALENCIA
ASUNTO	AUTO ADMITE DEMANDA NIEGA MEDIDA CAUTELAR

Santiago de Cali, veintitrés (23) de noviembre de dos mil veinte (2020).

MAGISTRADA PONENTE: Dra. LUZ ELENA SIERRA VALENCIA

El señor Eduardo Alfonso Correa Valencia, actuando en nombre propio promueve demanda de acción popular contra la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA y la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, por considerar vulnerados los derechos colectivos a la moralidad administrativa, los derechos de los consumidores y usuarios y el patrimonio Público.

En la demanda se formularon las siguientes **pretensiones**:

- . Declarar la vulneración de los derechos colectivos a la moralidad administrativa, el patrimonio público y los derechos de los consumidores y usuarios, vulnerados con las “actuaciones irregulares” de la Empresa Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.
- . Declarar que el artículo 313 y ss de la Ley 1955 de 2019, por medio de la cual se cobra una sobretasa nacional, es contrario a la moralidad administrativa, el patrimonio público y los derechos de los consumidores y usuarios, como quiera que impone una obligación económica que sus destinatarios no están en la obligación de soportar, pues es producto de actuaciones de “corrupción” de la Empresa Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.

- . Que, como consecuencia de lo anterior, se deje sin efectos los artículos 313 y ss de la Ley 1955 de 2019.
- . Que se inaplique por ser contrario al ordenamiento jurídico el artículo 313 y ss de la Ley 1955 de 2019, mediante el cual se implementa el cobro de una tasa nacional.
- . Que se ordene a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios adoptar los correctivos y medidas legales, judiciales, administrativas, financieras técnicas que hagan cesar la vulneración de los derechos colectivos citados, con el fin de evitar mayores costos a los usuarios del servicio público de energía eléctrica.

En el mismo escrito de la demanda solicitó que se decrete como **medida cautelar** que se ordene a la entidad demandada “ no dar aplicación al artículo 313 y ss de la ley 1955 de 2019” , pues considera que dicha medida se hace necesaria para evitar que se cobre una tarifa que “no tiene razón de ser”.

Previamente se inadmitió la demanda, para que el accionante subsanara algunos defectos de la misma, en el sentido de indicar cual sería el derecho colectivo afectado en este caso, sin que para ello se invocara la inaplicación de los artículos 313 y ss de la Ley 1955 de 2019, en razón a que dicha figura no puede ser aplicada a la presente acción constitucional por estar encaminada a la protección de derechos subjetivos.

De igual manera se le ordenó que informara si existe algún acto administrativo que considere sea la causa de la amenaza, vulneración o el agravio de derechos e intereses colectivos con ocasión del cobro de la sobretasa consagrada en la Ley 1955 de 2019 .

Finalmente se le advirtió que si su intención era demandar a la Empresa Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P, a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a la Comisión de Regulación de Energía y Gas y el Ministerio de Minas y Energía, debía señalarlo en la demanda y aportar el requisito de procedibilidad establecido en los artículos 144 ¹y 161² del CPACA, respecto de cada una.

¹ ARTÍCULO 144. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS. ...

Antes de presentar la demanda para la protección de los derechos e intereses colectivos, el demandante debe solicitar a la autoridad o al particular en ejercicio de funciones administrativas que adopte las medidas necesarias de protección del derecho o interés colectivo amenazado o violado. Si la autoridad no atiende dicha reclamación dentro de los quince (15) días siguientes a la presentación de la solicitud o se niega a ello, podrá acudir ante el juez. Excepcionalmente, se podrá prescindir de este requisito, cuando exista inminente peligro de ocurrir un perjuicio irremediable en contra de los derechos e intereses colectivos, situación que deberá sustentarse en la demanda.

² ARTÍCULO 161. REQUISITOS PREVIOS PARA DEMANDAR. La presentación de la demanda se someterá al cumplimiento de requisitos previos en los siguientes casos: ...

4. Cuando se pretenda la protección de derechos e intereses colectivos se deberá efectuar la reclamación prevista en el artículo [144](#) de este Código...

El accionante subsanó la demanda, y aunque no modificó las pretensiones de la misma, así como tampoco la medida cautelar solicitada, expuso los siguientes argumentos:

-. Que el artículo 314 y ss de la ley 1955 de 2019, impone a los usuarios del servicio público domiciliario de energía eléctrica la carga de responder económicamente por la indebida administración de Electricaribe S.A. ESP, lo cual es contrario al derecho colectivo a la moralidad administrativa, el que además es un principio esencial que orienta la función administrativa.

-. Que la actuación de las demandadas vulnera el artículo 148 de la Ley 142 de 1994, que trata de los requisitos de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica, el cual indica que no se cobraran servicios no prestados, tarifas, ni conceptos diferentes a los previstos en las condiciones uniformes de los contratos, así como tampoco, alterarse la estructura tarifaria definida para cada servicio público domiciliario.

-. Agrega que mediante Resolución SSPD-20191000035615 DEL 13/09/2019, por medio de la cual se desarrolla el artículo 313 de la ley 1955 de 2019, se modifica de manera unilateral las condiciones uniformes del contrato de energía eléctrica de los usuarios, constituyéndose en una arbitrariedad contra un segmento de los suscriptores del servicio a quienes se les aplica este cobro.

-. También asegura que con esta demanda se pretende proteger los derechos de los consumidores y usuarios contenido en el artículo 78 de la Constitución, pues pretender recuperar económicamente una empresa "quebrada por los malos manejos de sus administradores", trasladando la carga económica a los usuarios resulta inhumano e injusto, pues se desconoce la norma que consagra el contrato de condiciones uniformes, lo cual se traduce en una violación al principio de legalidad.

-. Agrega que la Resolución SSPD-20191000035615 del 13/09/2019 es el acto administrativo por medio del cual se ejerce la violación al derecho colectivo de los consumidores y usuarios.

-. Respecto a la vinculación de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, advirtió el accionante que debe incluirse como entidad demandada, como quiera por error involuntario omitió incluirla en la demanda. Además aclara que contra dicha entidad se agotó el requisito de procedibilidad de que trata el artículo 144 del CPACA.

- Finalmente, respecto a la vinculación de la empresa Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P, la Comisión de Regulación de Energía y Gas y el Ministerio de Minas y Energía, solicita el accionante que se de aplicación a la parte final del artículo 144 del CPACA, que establece la posibilidad de prescindir de dicho requisito cuando exista inminente peligro de ocurrir un perjuicio irremediable en contra de los derechos colectivos. Agrega que en este caso, si bien omitió agotar el respectivo requisito de procedibilidad, no obstante, se trata de hacer cesar la vulneración a los derechos colectivos a la moralidad administrativa y los derechos de los consumidores y usuarios, lo cual justifica la medida.

Finalmente solicita que en el evento de no considerar favorable su solicitud, "se desvincule" de la presente acción a las entidades referidas.

PARA RESOLVER SE CONSIDERA

1.- Admisión de la demanda:

Como quiera que el demandante subsanó la demanda de manera oportuna, se **ADMITIRÁ** conforme lo dispuesto en los artículos 18 de la ley 472 de 1998 y 144 del CPACA, contra la **PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS**, como quiera que se cumplen los requisitos establecido en dicha normatividad.

2. La medida cautelar:

Sobre las medidas cautelares en la acción popular, el artículo 25 de la Ley 472 de 1998, consagra:

"... ARTICULO 25. MEDIDAS CAUTELARES. *Antes de ser notificada la demanda y en cualquier estado del proceso podrá el juez, de oficio o a petición de parte, decretar, debidamente motivadas, las medidas previas que estime pertinentes para prevenir un daño inminente o para hacer cesar el que se hubiere causado. En particular, podrá decretar las siguientes:*

a) Ordenar la inmediata cesación de las actividades que puedan originar el daño, que lo hayan causado o lo sigan ocasionando;

b) Ordenar que se ejecuten los actos necesarios, cuando la conducta potencialmente perjudicial o dañina sea consecuencia de la omisión del demandado;

c) Obligar al demandado a prestar caución para garantizar el cumplimiento de cualquiera de las anteriores medidas previas;

d) Ordenar con cargo al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos los estudios necesarios para establecer la naturaleza del daño y las medidas urgentes a tomar para mitigarlo.

PARAGRAFO 1o. *El decreto y práctica de las medidas previas no suspenderá el curso del proceso.*

PARAGRAFO 2o. *Cuando se trate de una amenaza por razón de una omisión atribuida a una autoridad o persona particular, el juez deberá ordenar el cumplimiento inmediato de la acción que fuere necesaria, para lo cual otorgará un término perentorio. Si el peligro es inminente podrá ordenar que el acto, la obra o la acción la ejecute el actor o la comunidad amenazada, a costa del demandado...”*

En este caso, el Despacho negará la medida cautelar solicitada, como quiera que en esta etapa procesal no es posible determinar si efectivamente existe una amenaza de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y los derechos de los consumidores y usuarios cuya protección invoca el accionante, que justifique la adopción de alguna medida por parte del Juez Constitucional, en los términos del artículo 25 de la ley 472 de 1998.

En efecto, del contenido de la solicitud de medida cautelar y de la subsanación de la demanda, no es posible establecer si existe un daño inminente o que se configure un perjuicio irremediable con la presunta acción vulneradora de las entidades accionadas al realizar el cobro de la sobretasa consagrada en el artículo 313 de la ley 1955 de 2019, reglamentado por Resolución SSPD-20191000035615 del 13/09/2019, pues no se explica cómo esa situación perjudica en este momento, los derechos colectivos referidos, de manera que es necesario conocer la posición de las entidades accionadas para de esa manera dilucidar si se configura el perjuicio alegado por el accionante.

3. La vinculación de otras entidades:

Respecto a la vinculación de Empresa Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P, la Comisión de Regulación de Energía y Gas y el Ministerio de Minas y Energía, se observa que el accionante no allegó el requisito de procedibilidad consagrado en los artículos 144³ y 161⁴ del CPACA, por lo cual no es posible incorporarlas a la parte pasiva de la Litis.

³ ARTÍCULO 144. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS. ...

Antes de presentar la demanda para la protección de los derechos e intereses colectivos, el demandante debe solicitar a la autoridad o al particular en ejercicio de funciones administrativas que adopte las medidas necesarias de protección del derecho o interés colectivo amenazado o violado. Si la autoridad no atiende dicha reclamación dentro de los quince (15) días siguientes a la presentación de la solicitud o se niega a ello, podrá acudir ante el juez. Excepcionalmente, se podrá prescindir de este requisito, cuando exista inminente peligro de ocurrir un perjuicio irremediable en contra de los derechos e intereses colectivos, situación que deberá sustentarse en la demanda.

⁴ ARTÍCULO 161. REQUISITOS PREVIOS PARA DEMANDAR. La presentación de la demanda se someterá al cumplimiento de requisitos previos en los siguientes casos: ...

4. Cuando se pretenda la protección de derechos e intereses colectivos se deberá efectuar la reclamación prevista en el artículo [144](#) de este Código...

De igual manera, como quiera que no se advierte en este momento procesal la configuración de un perjuicio irremediable, no es posible prescindir del requisito aludido en los términos del párrafo del artículo 144 del CPACA, conforme lo solicita el accionante, y por tanto no es procedente la integración de dichas entidades al presente proceso.

4-. Amparo de pobreza:

En cuanto a la solicitud de amparo de pobreza, en la subsanación de la demanda el demandante no acreditó siquiera sumariamente que se encontrara en imposibilidad de solventar los gastos mínimos del proceso, por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 151 del CGP, se negará la solicitud.

En consecuencia, el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA,

R E S U E L V E:

1: ADMITIR la demanda de acción popular presentada por el señor EDUARDO ALFONSO CORREA VALENCIA, contra la **PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA y LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS.**

2.- Notificar personalmente esta providencia a las entidades demandadas, de conformidad con el artículo 199 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 612 del Código General del Proceso.

3. Correr traslado de la demanda a las entidades demandadas por el término de diez (10) días para que contesten y soliciten las pruebas que consideren pertinentes, informándoseles que la decisión será proferida dentro de los treinta (30) días siguientes al vencimiento del traslado.

4. Comunicar al Ministerio Público la existencia de la presente demanda, para que intervenga si lo considera conveniente, como parte pública en defensa de los derechos e intereses colectivos.

5. De conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 472 de 1998, por cuenta de la parte demandante, infórmese a la comunidad sobre la admisión de la demanda, por un medio masivo de comunicación o por cualquier otro mecanismo eficaz.

6. Remitir copia de la demanda y del auto admisorio a la Defensoría del Pueblo, según lo

dispuesto por el artículo 80 de la Ley 472 de 1998.

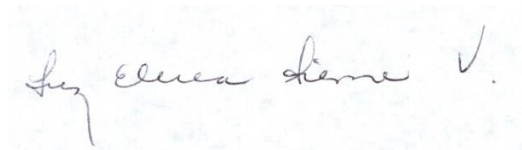
7. NEGAR la medida cautelar solicitada por el accionante, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

9. ABSTENERSE de vincular al proceso a la Empresa Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P, la Comisión de Regulación de Energía y Gas y el Ministerio de Minas y Energía por lo expuesto en la parte motiva de este auto.

10. NEGAR la solicitud de amparo de pobreza deprecada por el accionante, por las razones consignadas en esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La Magistrada,

A handwritten signature in black ink, reading "Luz Elena Sierra Valencia" followed by a checkmark.

LUZ ELENA SIERRA VALENCIA